



JOSÉ NAVA

Salud en agonía

Los datos económicos y sociales son alarmantes, los índices indican que el país está en un interminable deterioro, afectando la calidad de vida de todos los venezolanos. Así, la salud pende de un hilo, y el hambre sigue causando estragos; mientras tanto, lo político sigue revelándose como una lucha entre contrarios sin posibilidades de generar consensos

La crisis del sistema de salud venezolano llega a niveles crónicos y terminales, dibujando una catástrofe para miles de personas que ven impotentes cómo se deterioran sus condiciones de vida y de salud.

Para Codevida, una coalición de organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud, la falta de medicinas está matando a los pacientes y se espera que la situación se agrave en los próximos meses si el Gobierno no responde adecuadamente a las grandes necesidades que existen.

Los grupos de pacientes más vulnerables son aquellos que tienen enfermedades graves y los que requieren someterse sistemáticamente a un tratamiento, como por ejemplo los enfermos renales. Según la coalición, a principios del mes de febrero, se registró la paralización de 32 unidades de diálisis en todo el país, debido a que se les agotó el inventario, colocando en peligro de muerte a los aproximadamente 16.000 pacientes renales.

Pese a que el ministerio de la Salud ha insistido en que no existe una crisis y que los medicamentos necesarios están por llegar al país, cientos de pa-

cientes aún esperan por los medicamentos, mientras que otros han debido recurrir al sistema de salud privado que aún sigue prestando sus servicios, aunque a un costo imposible de cubrir para muchas familias.

Situación similar están viviendo los pacientes VIH positivo, trasplantados, diabéticos e hipertensos. La falta de los insumos necesarios, que deben ser entregados oportunamente por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, está produciendo secuelas irreparables en la vida de pacientes que, en otras condiciones, pudiesen atender su dolencia.

La crisis se hace cada vez más incontenible, por ello una protesta a nivel nacional acaparó las redes sociales y un lema fue sistemáticamente repetido “no me quiero morir”, vitoreado por pacientes angustiados por su suerte o la de sus familiares.

La respuesta esperada no termina de llegar, mientras que la oposición se ha centrado en que el gobierno permita la apertura de un “canal humanitario” para que puedan acceder al país medicinas e insumos médicos necesarios, el Gobierno se niega a reconocer que el país esté



Protesta de pacientes renales.

JOSÉ NAVA

atravesando una “emergencia humanitaria” y justifica que la falta de insumos se debe a las sanciones internacionales, además, que de decretarse dicha emergencia se abrirían las puertas para una “intervención militar extranjera”.

El calvario en que están sumidos los pacientes y sus familiares no tiene precedentes, el testimonio de una mujer que se manifestó en la protesta en la ciudad de Caracas fue contundente: “Esto no es una crisis, es un genocidio, un holocausto contra los enfermos. Queremos vivir, nos queremos morir de viejos”.

EL HAMBRE SIGUE ANUNCIÁNDOSE

Relacionado con la emergencia de la salud, se hace evidente, también, la crisis alimentaria. Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, miles de personas en Venezuela sufren hambre, no tienen acceso a medicamentos esenciales y están tratando de sobrevivir en una espiral que no parece tener final.

Esta postura se puede respaldar con los datos suministrados por Cáritas de Venezuela, quie-

nes estimaron que durante el año 2017 los índices de desnutrición fueron alarmantes, especialmente en los sectores más pobres del país.

Sus estudios revelaron que durante el 2017 fallecieron semanalmente entre cinco y seis niños por falta de alimentación, y al menos 33 % de la población infantil presentaba retardo en su crecimiento, lo que a juicio de la nutricionista Susana Raffalli, es un “daño irreversible”.

SE VUELVE A LEVANTAR LA MESA

Luego que en diciembre de 2017 se iniciara un proceso de negociaciones entre el Gobierno y la oposición, no pasó mucho tiempo para que este fracasara.

Con una oposición muy dividida y desarticulada, y un Gobierno que se refugiaba en un discurso que terminaba por imponerse y manejar así las agendas y propósitos, el intento de negociación fue apagándose hasta quedar tan solo un documento que recogía un acuerdo unilateral elaborado por el Gobierno, quien pretendía fuese aceptado sin reparos por la oposición.

Mientras que, por su parte, los representantes de la oposición negaron que existiese algún acuerdo y se negaron a fir-

mar el documento presentado por el Gobierno, ya que no suponía garantías para las venideras elecciones presidenciales, además que adelantaba la fecha de su realización para el mes de abril.

No obstante, y frente al presidente Danilo Medina (República Dominicana) y el ex presidente español (José Luis Rodríguez Zapatero), la delegación del Gobierno procedió a firmar la copia del documento donde supuestamente estaban reflejados los “acuerdos”.

Ese mismo día, por la noche, el presidente Maduro apareció en los medios y con el “acuerdo” en mano procedió a firmarlo, además, se comprometió a acatar cada una de sus partes.

Por eso, pocas horas después de estos episodios, en una sincronización ya conocida que dice mucho de qué lado está ubicado el Consejo Nacional Electoral, se fijó para el 22 de abril la realización de las elecciones presidenciales, en una fecha y bajo unas condiciones que son absolutamente favorables para el Gobierno y van en franco detrimento para la oposición.

Por los momentos la mesa de negociación está clausurada. La postura de la oposición buscaba que las elecciones no se realizaran en una fecha tan cercana y pretendía, además, el respeto de unas normas y criterios mínimos que garantizaran la transparencia y equidad en los próximos comicios. No se pudo lograr, el gobierno se muestra cada vez más encerrado en sus propios intereses y no pretende abrir espacios y permitir acciones que puedan descontarle poderes, sus propósitos siguen firmes.

LAS PRESIDENCIALES: MENOS TIEMPO, MENOS GARANTÍA

El anuncio por parte del CNE de los comicios presidenciales no tomó por sorpresa a muchos. Desde hace días se conocía que ya el Gobierno estaba manejando posibles fechas para las elecciones.

En este sentido, además de la fecha, Tibisay Lucena informó que se iniciaría el proceso de inscripción y actualización del Registro Electoral hasta el 20 de febrero, para publicar el 5 de marzo el número total de electores que participarían en las presidenciales.

Además, se informó que las postulaciones de candidatos se realizarán desde el 24 al 26 de marzo. Con respecto a la campaña, esta comenzará el 2 de abril y tendrá una duración de dieciséis días.

Nada dijo sobre las denuncias que se suscitaron en las pasadas elecciones para gobernadores o las municipales en torno a la suspensión o mudanza de centros electorales, o sobre el hecho de que Maduro ya tiene días en campaña electoral, un vicio reiterado que lo coloca en ventaja frente a cualquier otra alternativa.

Luis Emilio Rondón, también rector del CNE, manifestó su rechazo por el modo en que se está haciendo la convocatoria de este proceso electoral, ya que no existen todas las garantías necesarias que den confianza a los venezolanos.

Argumentó que la falta de tiempo impide que se pueda realizar una buena auditoria, un buen seguimiento y proceso de observación internacional, por ello cree que “menos tiempo, menos garantía”.

UNA OPOSICIÓN A LA MEDIDA

No hay mayor verdad que aquella que se hace evidente e irrefutable. El ambiente democrático venezolano se encuentra en un tiempo de mucha fragilidad y a merced de las tensiones propias de un régimen que quiere imponerse por la fuerza de su propia voluntad.

Al tiempo que el CNE anunciaba las fechas de las elecciones y todo el cronograma electoral, se terminaba de fraguar, también, la desarticulación de la oposición y de cualquier fuerza política con algún tipo

de discurso contrario a la línea de Maduro.

De esta manera, a la lista de inhabilitados se suman representantes del chavismo disidente, tal como Rafael Ramírez (ex presidente de Pdvsa) y Miguel Rodríguez Torres (ex ministro de Interior).

Además, el Gobierno decidió inhabilitar la tarjeta política de la MUD, así como a los partidos políticos Voluntad Popular y Primero Justicia, quedando estos a la deriva.

Por su parte, se mantienen activos otros partidos opositores como Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista y Acción Democrática, cuyos principales dirigentes han sido duramente criticados por sus acciones y posturas en estos tiempos, generando un quiebre dentro de la unidad opositora, permitiendo que no se tenga un liderazgo visible y representativo que pueda competir por la carrera presidencial.

SIGUE LA CENSURA Y PERSECUCIÓN

Periodistas del portal web Armando.info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk y Roberto Denis, han recibido amenazas personales, por lo que han decidido salir del país.

Todo se inició por una investigación sobre el negocio y la corrupción que se ha creado en torno a los CLAP y la importación de alimentos.

Por su parte, dos directivos de la fundación Embajadores Comunitarios, Gregory Hinds y Geraldine Chacón, organización que trabaja en diversas comunidades populares formando a jóvenes siguiendo los conocidos “modelos” de las Naciones Unidas, fueron privados de su libertad por el Sebin e imputados por los delitos de agavillamiento e instigación pública; además, se les impuso como medida cautelar la presentación cada quince días en los tribunales, y dos fiadores.

Igualmente, un caso que tuvo mucha resonancia fue la detención por parte del Sebin de Enrique Aristiguieta Gramcko, político de larga trayectoria, reconocido por haber sido miembro de la Junta Patriótica, organización que asumió el gobierno después del derrocamiento de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958; no obstante, fue posteriormente liberado. Todos los casos tienen su vínculo con lo político y dan cuenta de una persecución selectiva.

VOTAR O NO VOTAR

Dentro de la oposición se presenta el dilema: llamar a votar o a no votar. No hay unanimidad dentro de los partidos. Hay una fuerte ala abstencionista, en la que están partidos como VP, que está invitando a no votar y mucho menos a participar con candidato alguno, ya que “no están dadas las condiciones” para que exista un proceso electoral. Mientras que, otro grupo, donde se ubica AD, no niega de lleno la participación en los comicios, aunque de hacerlo, debe ser “dentro de la unidad”.

LA MINERÍA ES MUERTE

Un operativo realizado por la 51ª Brigada de Infantería de Selva del Ejército en la mina Cica-pira —ubicada en el municipio Roscio del estado Bolívar— arrojó como saldo la muerte de dieciocho personas: diecisiete hombres y una mujer.

No ha existido pronunciamiento oficial, tan solo los familiares de las víctimas se han expresado públicamente y están exigiendo a las autoridades que se esclarezcan los hechos.